



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/1282/25

Referencia: Expediente núm. TC-04-2024-0872, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Juan Portalatín Castillo Castillo contra la Sentencia número 1704, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; Miguel Valera Montero, primer sustituto; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana de Cabrera y José Alejandro Vargas Guerrero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia recurrida

1.1. La decisión jurisdiccional objeto del presente recurso de revisión constitucional es la Sentencia núm. 1704, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018); su dispositivo estableció:

Primero: Admite como interviniente a la Licda. Laura María Guerrero Pelletier, Directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en los recursos de casación interpuestos por Juan Portalatín Castillo, Marcos Lara Lorenzo y Sauris Rodríguez Sánchez, contra la sentencia núm. 84-2017, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 20 de junio de 2017, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;

Segundo: Rechaza los recursos de casación interpuestos por Juan Portalatín Castillo, Marcos Lara Lorenzo y Sauris Rodríguez Sánchez, y en consecuencia, confirma en todas sus partes la decisión impugnada;

Tercero: Condena a los recurrentes Juan Portalatín Castillo, Marcos Lara Lorenzo y Sauris Rodríguez Sánchez, al pago de las costas del procedimiento;

Cuarto: Ordena a la Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional para los fines correspondientes.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1.2. La Sentencia núm. 1704 fue notificada en manos del señor Juan Portalatín Castillo Castillo, mediante memorándum suscrito por la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, y recibido el diez (10) de abril del dos mil diecinueve (2019).

2. Presentación del recurso de revisión

2.1. El señor Juan Portalatín Castillo Castillo apoderó a este tribunal constitucional del recurso de revisión constitucional contra la sentencia anteriormente descrita, mediante instancia depositada el dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019), a través de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, recibido en esta sede el dieciocho (18) de septiembre del dos mil veinticuatro (2024).

2.2. El presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional fue notificado a la Procuraduría General de la República mediante Oficio número 05147, suscrito por la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, y recibido el tres (3) de junio de dos mil diecinueve (2019).

3. Fundamentos de la sentencia recurrida

3.1. A través de la Sentencia núm. 1704, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó los recursos de casación incoados por los imputados del proceso que dio origen al presente caso, entre ellos el interpuesto por el señor Juan Portalatín Castillo Castillo, con base en los siguientes argumentos:

Considerando, que en principio esta alzada procederá a decidir los incidentes planteados por los recurrentes sobre extinción de la acción penal, los cuales serán contestados de manera conjunta por perseguir un mismo fin;



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Considerando, que los recurrentes Juan Portalatín Castillo, Marcos Lara Lorenzo y Sauris Rodríguez Sánchez; solicitaron de manera incidental la declaración de la extinción de la acción penal en su memorial de casación, por el vencimiento del plazo del límite máximo de duración del proceso penal (...)

Considerando, que esta Sala de la Corte de Casación reitera su jurisprudencia contenida en la sentencia número 77 del 8 de febrero de 2016, en el sentido de que “... el plazo razonable, uno de los principios rectores del debido proceso penal, establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella, reconociéndosele tanto al imputado y como a la víctima el derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece el Código Procesal Penal, frente a la inacción de la autoridad (...); por consiguiente, un plazo establecido en la ley procesal, solo constituye un parámetro objetivo, a partir del cual se analiza la razonabilidad del plazo, en base a: 1) la complejidad del asunto; 2) la actividad procesal del interesado; y 3) la conducta de las autoridades judiciales; por esto, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley, vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa (...)

Considerando, que en la especie se puede determinar que iniciado el cómputo el día de 29 de julio 2009, por imposición de medida de coerción, pronunciándose sentencia condenatoria el 14 de mayo de 2012, interviniendo sentencia en grado de apelación el 10 de septiembre de 2012, la cual ordenó nuevo juicio, siendo emitida sentencia condenatoria nueva vez el 17 junio 2016, la cual fue recurrida, emitiendo sentencia la corte, el 20 junio 2017; que se presentaron



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

recursos de casación contra esta sentencia en fechas 17,18 y 19 de julio de 2017, y resueltos el 11 de diciembre de 2017, para todo lo cual se agotaron los procedimientos de rigor, y las partes ejercieron los derechos que les son reconocidos. Resulta pertinente reconocer que la superación del plazo previsto en la norma procesal penal se inscribe en un período razonable, atendiendo a las particularidades del caso y la capacidad de respuesta del sistema, de tal manera que no se ha aletargado el proceso indebida o irrazonablemente, no obstante esta Sala pudo comprobar que en la fase de juicio hubo considerables aplazamientos provocados por la defensa de los imputados indistintamente, así como rebeldías, presentaciones de incidentes, que incidieron en el retardo del conocimiento del proceso, por consiguiente, procede desestimar la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso pretendida por los imputados recurrentes Juan Portalatín Castillo, Marcos Lara Lorenzo y Sauris Rodríguez Sánchez.

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por los recurrentes:(...)

En cuanto al recurso de Juan Portalatín Castillo:

Considerando, que el primer medio expuesto por este, arguye entre otras cosas, que en cuanto al presente proceso se encuentra ventajosamente vencido, habían transcurrido siete (7) años de estos imputados estar sometidos al presente proceso penal, sin que exista una sentencia que pusiera fin al proceso, por lo que es evidente que conforme le fue planteado a la Corte a-qua, el tribunal conoció y decidió una acción penal ya extinguida por vencimiento de la duración



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

máxima del proceso; que dicha petición fue solicitada en casación, dando contestación de la misma precedentemente;

Considerando, que otro de los puntos atacados en el primer medio le atribuye a la corte haber emitido una decisión contradictoria con fallos anteriores de la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia núm. 84 del 10 de junio de 2015; sin embargo, el recurrente no especifica en qué se basa para que exista dicha contradicción, no hace alusión a ningún aspecto; por consiguiente, esta Sala rechaza este alegato por infundado;

Considerando, que en cuanto al segundo medio aludido existe una atipicidad del ilícito imputado, toda vez que si bien nuestra normativa penal tipifica el desfalco, el mismo no se enmarca en las disposiciones del artículo 171 del Código Penal, que es por el cual se condena a Juan Portalatín, sino que es la Ley núm. 712 del 27 de junio de 1927, que deroga y sustituye los artículos 169 al 172 del Código Penal Dominicano, por lo que ha sido condenado por una normativa derogada;

Considerando, que con respecto a este alegato, la Corte a-qua tuvo a bien referirse de la siguiente manera: “(página 28, numeral 10)... el tribunal e primer grado dio por establecido que los imputados Marcos Lara Lorenzo, Juan Portalatín Castillo Castillo y Sauris Rodríguez Sánchez, en sus calidades de Director General del Programa de Reducción de Apagones (P. R. A.), Director Administrativo y Financiero del Programa de Reducción de Apagones (P. R. A.), respectivamente cometieron desfalco, en razón de que siendo funcionarios destinaron dinero o fondos públicos a uso o fin distinto para el cual le fue entregado o puesto bajo su guarda, en violación al



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

artículo 171 del Código Penal (modificado por el artículo 3 de la Ley 712 del 27 de junio de 1927, G. O. 3872)]; en consecuencia, la Corte a-qua concibió que la sentencia atacada resultaba justa y correcta, por lo que entendió improcedente acoger la revocación pretendida; como está definido en el código se considera desfalco a la falta, negligencia o negativa de los funcionarios o empleados en depositar o remitir fondos cuando deba hacerlo, de manera que toda persona encargada de un servicio de interés público o un agente investido de una porción de la autoridad pública es un funcionario público; por consiguiente, esta alzada considera pertinente rechazar el vicio aludido.

Considerando, que en el tercer y último medio impugnado por el recurrente, este alega sentencia manifiestamente infundada por desnaturalización y errónea interpretación de las pruebas y desnaturalización de los hechos, y por vía de consecuencia, violación al derecho de defensa del imputado; que el Tribunal a-quo y el de primer grado al fallar y decidir en la forma que lo hicieron, incurrieron en el vicio de falta de base legal, toda vez que una sentencia no puede en modo alguno pretender sustentarse en versiones o declaraciones falaces y contradictorias de unos supuestos testigos, que en todo caso deberían estar entre los acusados, sin que existan otros medios adicionales de prueba que se sienten sobre bases jurídicas firmes, y sin embargo, de esas supuestas pruebas testimoniales no se extrae responsabilidad penal del recurrente, justificativa de la materialización del desfalco en perjuicio del Estado Dominicano;

Considerando, que con respecto a los vicios planteados, nos remitimos a las consideraciones de esta Sala, contenidas en la respuesta a los medios planteados por el imputado reclamante Marcos Lara Lorenzo; por lo cual los razonamientos expuestos en respuesta a aquellos, sirven



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

de fundamento, mutatis mutandis, para el rechazo de estos semejantemente, para evitar su reiteración innecesaria; por tanto, procede desestimar este aspecto de los medios analizados;

Considerando, que esta Sala se encuentra conteste con lo establecido por el tribunal de alzada, al dar aquiescencia a lo resuelto por el tribunal sentenciador, en virtud de la contundencia de las pruebas presentadas en contra del recurrente Juan Portalatín Castillo, y que sirvieron para destruir la presunción de inocencia que le asistía, por lo que no hay nada que reprochar a la Corte a-qua por haber decidido como se describe, estuvo debidamente justificada, sustentada como en la suficiencia de las pruebas presentadas en su contra y que sirvieron para establecer fuera de toda duda su culpabilidad; por lo que los medios devienen en rechazo y consecuentemente su recurso;

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión

4.1. El señor Juan Portalatín Castillo pretende que se anule la decisión objeto del presente recurso. A continuación, transcribimos algunos de los argumentos que, en esencia, fundamentan dicha pretensión:

IV. Sobre lo decidido por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia

(1) Ausencia de motivación, respecto del planteamiento de extinción de la acción penal, por haber superado el plazo máximo de duración del proceso, sin que se emita sentencia definitiva. (...)

Como puede observarse, resulta contradictorio y carente de motivación, el criterio del aquo, quien, mientras por un lado precisa



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

que las partes ejercieron todos los derechos que les son reconocidos, por otro hace mención de las llamadas particularidades del caso y la capacidad de respuesta del sistema, ignorando que, el legislador, para evitar eternización de los procesos, no solo puso en manos del órgano persecutor plazos adicionales cuando este justifica necesidad de prórroga o en su defecto declaratoria de complejidad -cuyos plazos se amplían-, sino que, fijó plazos para que, ante el pronunciamiento de sentencia firme -en diversos grados-, y frente al ejercicio de vías de impugnación, los tribunales de alzada tienen el deber de decidir en esos plazos. Pero, además, aun cuando respecto de la respuesta del incidente de extinción pretenda el aquo fallarlo en criterio común, se hace imperiosamente necesario desglosar las particulares actuaciones de los recurrentes que justifiquen que estos retardaron o incurrieron en actuaciones chicaneras, para que el proceso no se conozca. La decisión del aquí no ofrece motivación en esta dirección, muy por el contrario, en simple fórmula genérica, se refiere a las defensas de los imputados recurrentes, cuyas presentaciones de incidentes incidieron en el retardo del conocimiento del proceso.

El recurrente señor Juan Castillo Portalatín, desea saber, cuales acciones él o sus abogados en el primer o segundo juicio, en la primera o segunda instancia de apelación, provocaron dilaciones innecesarias, por las cuales no se conoció o fueron obstáculos para el desarrollo y conclusión del proceso. (...)

(b) El recurrente fue acusado, juzgado y condenado por una legislación inexistente. (...)

El recurrente Juan Castillo Portalatín fue -inicialmente- acusado de violar las disposiciones de los artículos 166, 167, 170, 171, 172, 265 y



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

266 del Código Penal Dominicano. Finalmente, resultó condenado por violar los artículos 170 y 171 insertos en el referido código, que tipifica y sanciona el Desfalco en la República Dominicana. Conforme fue presentada la acusación, la conducta presuntamente materializada por el recurrente y de relevancia penal, consistió en: haber revisado (y autorizado) los soportes de un cheque para comprar materiales para una obra del Programa de Reducción de Apagones (PRA). (...)

Mas aun, el Delito de desfalco tiene sus elementos constitutivos, conforme a los cuales, para su configuración se requiere: 1) La calidad de funcionario o empleado público, condición NUNCA negada y no controvertida a lo largo del proceso en contra del recurrente Juan Portalatín Castillo Castillo; 2) Un acto material de sustracción, negligencia o negativa de entrega de un bien, siendo necesario que ese acto se realice dentro de las funciones propias del funcionario o empleado público. Esta actuación NUNCA fue realizada por el recurrente ni verificada por los tribunales sentenciadores - conforme se desarrollaron los elementos probatorios a cargo-, debido a que no se comprobó que el recurrente DISTRAJO en su provecho personal, particular o para beneficios de terceros allegados a él, del cheque que, al ser revisado con sus soportes, autorizó y; 3) La intención fraudulenta. El Recurrente, dentro de las funciones públicas que desempeño, solo se limitaba a tramitar por la vía correspondiente los cheques, con sus debidos soportes y previa verificación de departamentos previos, que solo remitían a la firma del recurrente todo lo procedente para el pago y que finalmente fuera (como al efecto se hizo) debidamente AUDITADO, por lo que, NUNCA hubo por parte del recurrente INTENCION DOLOSA en un simple trámite, que era lo que sus funciones demandaban en el Programa de Reducción de Apagones (PARA).



República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El recurrente en sus medios de impugnación casacional hizo el debido reclamo en el sentido de que, fue acusado, juzgado y condenado por una legislación inexistente, debido a que, el tipo penal de desfalco inserto en los artículos 170 y 171 de código penal dominicano (primario), fueron derogados por la Ley núm 712 del 27 de junio del de 1927 (...)

Al fallar de esta manera, el tribunal viola sus propios precedentes. El primero respecto del cual, ha entendido el tribunal a quo, que la corte de apelación debe recoger su propio camino y no limitarse a referirse a lo consignado por el tribunal de primer grado, porque de hacerlo de esa manera, la decisión carece de motivación. En este caso, el a quo, lejos de subsanar el vicio, incurre en el mismo, provocando un agravio no solo con el rechazo del planteamiento del recurrente, sino, con la violación de su propio criterio. (...)

De todas maneras, nobles jueces de este tribunal constitucional, lo que más agrava el tema de la calificación endosada al recurrente y por el cual se le juzgó y condenó, no solo consiste en la violación del tribunal a quo, en mencionar la referencia dada por la corte de apelación respecto de la Ley 712 del 27 de junio de 1927, que derogó los artículos 169 al 172 del código penal dominicano, sino que, esta última legislación a su vez fue DEROGADA por la Ley 3379 del 8 de septiembre del año 1952. Es decir, el recurrente se le acusó, juzgó y condenó por una legislación inexistente, hizo el debido reclamo en apelación y la corte desestimó el mismo, por entender que la legislación vigente lo sea la Ley 712. El tribunal a quo no ofrece motivaciones sobre este particular, simplemente ratifica la simple mención de la corte, sin embargo, al accionar de esta manera, ignora que la nueva legislación al respecto, lo es la Ley 3379 del 8 de septiembre del año 1952.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Honorables Magistrados, el recurrente Juan Portalatín Castillo Castillo y su familia, llevan más de diez (10) de Intensa incertidumbre y preocupación, debido a que, siendo un ciudadano recto y ejemplar, con una hoja de servicio limpia; sin haber NUNCA pisado la puerta de un destacamento, ha debido enfrentar un acusación ligera, arbitraria e injusta, toda vez que, su único accionar en el caso que se le endosa, es haber examinado los soportes de cheques, provenientes de otros departamentos y de los cuales no tiene control y dominio, al igual que el destino final de los fondos de los cheques autorizados, cheques que al ser auditados se determinó que todo estaba CORRECTO. Frente a esta arbitraria acusación, solo procura e impetra que algún tribunal de justicia verifique con objetividad su caso y sea reivindicada su inocencia. (...)

42. En conclusión, al examinar el caso objeto de decisión se han producido las violaciones invocadas por la parte recurrente relativas a la falta de motivación de la sentencia recurrida, este Tribunal Constitucional determina que dicha sentencia efectivamente no cumple con los requisitos que ha establecido en sus precedentes más arriba citados, por lo que procederá a acoger el recurso de revisión y a anularla Resolución núm.58-2011, de veinte (20) de enero de dos mil once (2011), dictada por las Salas Reunidas por la Suprema Corte de Justicia, la cual declaró inadmisibile el recurso de casación interpuesto por los señores Rosita Núñez y Severino Guillén el quince(15)de octubre de dos mil diez (2010).

4.2. En ese sentido, concluye su escrito solicitando a este tribunal:

PRIMERO: ADMITIR el presente recurso de revisión constitucional por haber sido interpuesto de conformidad con la Ley No. 137-11.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

SEGUNDO: Declarar nula la sentencia No. 1704 dictada por la Segunda Sala penal de la honorable Suprema Corte de Justicia en fecha 31 de octubre del 2018 y notificada al recurrente en fecha 16 del mes de abril del año 2019.

TERCERO: ORDENAR la devolución del expediente a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que la Segunda Sala conozca nuevamente el recurso de casación que da lugar al presente recurso de revisión constitucional, apegándose estrictamente a las fundamentaciones y criterio establecidos por este tribunal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 54, numerales 9 y 10, de la Ley núm. 137-11.

CUARTO: COMPENSAR las costas en cumplimiento del art. 7.6 de la Ley No. 137-11, y

QUINTO: DISPONER la publicación de la sentencia a intervenir en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Petitorio sobre Medida Cautelar:

Único: Ordenar la SUSPENSIÓN de ejecución de la sentencia No. 1704, dictada por la Segunda Sala Penal de la Honorable Suprema Corte de Justicia en fecha 31 de octubre del 2018, hasta tanto, este honorable tribunal decida el fondo del Recurso de Revisión interpuesto por el recurrente contra la referida sentencia.

5. Dictamen de la Procuraduría General de la República

5.1. El presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional fue notificado a la Procuraduría General de la República a través de la



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Comunicación núm. 05147, emitida por la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, recibida el tres (3) de junio de dos mil diecinueve (2019). Al efecto, la Procuraduría General de la República depositó su dictamen a través de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de julio de dos mil diecinueve (2019), en el cual solicita el rechazo del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Fundamenta dicha pretensión, esencialmente, en los argumentos que siguen:

En tal sentido, el infrascrito Ministerio Público analizados los argumentos invocados por el recurrente el señor Juan Portalatín Castillo, los fundamentos en que se basó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia para rendir la decisión impugnada. En ese tenor, resulta evidente que la sentencia impugnada nos e le atribuye los vicios invocados por la recurrente, como tampoco la vulneración a sus derechos y garantías fundamentales, tales como la tutela judicial efectiva, debido proceso de ley y el derecho de defensa, así como los principios de aplicación de los mismos constitucionalmente consagrados, en virtud de que las diferentes decisiones impugnadas por el recurrente y que culminaron en este recurso de revisión constitucional fueron rendidas al amparo de las disposiciones legales que regulan cada uno de los aspectos que sirvieron de base.

Por todo lo antes expuesto, el Ministerio Público es de opinión que en el presente caso no se violaron los artículos 170 y 172, del Código Penal Dominicano y los artículos 7.6, 53 y 54 numeral 9 y 10 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, los artículos 44.1, 148, 149, 54.2 y 1 del Código Procesal Penal y 6, 68 y 69 de la Constitución Dominicana, y en la sentencia objeto de la demanda están reunidos los presupuestos señalados por la ley y los precedentes del Tribunal Constitucional para



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

su admisibilidad, toda vez que no se aprecia alegato o argumento alguno dirigido a demostrar la configuración de las causales establecidas por los antes señalados de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, en consecuencia el presente recurso de revisión deviene en inadmisibile sin necesidad de ser ponderado en otros aspectos.

5.2. Concluyó el referido dictamen solicitando a este tribunal:

PRIMERO: Que se declare bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de Revisión Constitucional interpuesto por el señor Juan Portalatín castillo en contra de la sentencia núm. 1704-2018, de fecha 31 de octubre de año 2018, dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y de conformidad con la ley.

SEGUNDO: Que procede en cuanto al Fondo Rechazar, el recurso de revisión constitucional interpuesto por el señor Juan Portalatín Castillo en contra de la sentencia núm. 1704-2018, de fecha 31 de octubre de año 2018, dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

6. Pruebas documentales

Los documentos más relevantes depositados por las partes en el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional son los siguientes:

1. Copia del memorándum remitido por la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019), recibido el diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2. Copia de la Comunicación núm. 05147, remitida por la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, recibido el tres (3) de junio de dos mil diecinueve (2019).
3. Acto núm. 246/2019, instrumentado por el ministerial Rafael Antonio Jorge Martínez, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, el diecinueve (19) de julio de dos mil diecinueve (2019).
4. Copia de la Sentencia núm. 1704, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
5. Copia de la Sentencia núm. 84-2017, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017).
6. Copia de la Sentencia núm. 249-02-2016-SS-EN-00157, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diecisiete (17) de junio de dos mil dieciséis (2016).

**II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

7. Síntesis del conflicto

7.1. El presente caso tiene su origen con la acusación pública presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa en contra de los señores Marcos Lara Lorenzo, Sauris Rodríguez y el actual recurrente, Juan Portalatín Castillo Castillo, luego de haber recibido denuncias por desvío de fondos para usos no institucionales en el Programa de Reducción



República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

de Apagones (PRA). Consecuentemente, los referidos imputados fueron sometidos a la justicia por violación al artículo 171 del Código Penal, que establece el delito de desfalco.

7.2. Conforme establece la parte recurrente y consta en la sentencia objeto del presente recurso, el presente caso fue conocido en el dos mil nueve (2009), pronunciándose sentencia condenatoria en contra de los imputados en el año dos mil doce (2012) y posteriormente en el mismo año, en grado de apelación, se ordenó la celebración de un nuevo juicio.

7.3. Para el conocimiento del nuevo juicio ordenado en grado de apelación, fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. A través de la Sentencia núm. 157-2016, dictada el diecisiete (17) de junio de dos mil dieciséis (2016), declaró culpables de desfalco a los imputados, condenando al recurrente a cumplir la pena de dos (2) años de reclusión menor y al pago de una multa ascendente a quinientos mil pesos dominicanos con 00/100(\$500,000.00).

7.4. Inconformes, los señores Sauris Rodríguez Sánchez, Marcos Lara Lorenzo y Juan Portalatín Castillo Castillo interpusieron sendos recursos de apelación, de los cuales fue apoderada la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. A través de la Sentencia núm. 84-2017, dictada el veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017), dicha corte conoció en conjunto los referidos recursos de apelación, modificando la sentencia anteriormente descrita, suspendiendo a favor del recurrente un año de la pena de prisión y reduciendo la multa impuesta a la suma de doscientos cincuenta mil pesos dominicanos con 00/100 (\$250,000.00).

7.5. Los imputados, señores Marcos Lara Lorenzo, Juan Portalatín Castillo Castillo y Sauris Rodríguez Sánchez también interpusieron sendos recursos de



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

casación, los cuales fueron decididos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia a través de la decisión jurisdiccional objeto del presente recurso de revisión constitucional.

7.6. Cabe destacar que la Sentencia número 1704, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre del dos mil dieciocho (2018), ya ha sido examinada anteriormente por este tribunal constitucional, con relación al recurso de revisión constitucional interpuesto por otro de los imputados del mismo proceso, el señor Sauris Rodríguez Sánchez. Dicho recurso fue decidido el veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021), a través de la Sentencia TC/0157/21.

8. Competencia

Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

9.1. La admisibilidad del recurso de revisión está condicionada a su interposición dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la sentencia, según el artículo 54.1 de la referida Ley núm. 137-11, que establece: «El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia». En



República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

relación con el plazo previsto en el texto transcrito, el Tribunal Constitucional estableció en la Sentencia TC/0143/15 que este un plazo franco y calendario.

9.2. A través de la Sentencia TC/0109/24, este tribunal constitucional adoptó el criterio de que «[...]el plazo para interponer recursos ante esta instancia comenzará a correr únicamente a partir de las notificaciones de resoluciones o sentencias realizadas a la persona o al domicilio real de las partes del proceso, incluso si estas han elegido un domicilio en el despacho profesional de su representante legal».

9.3. En el expediente consta que la sentencia objeto del presente recurso fue entregada al señor Juan Portalatín Castillo Castillo mediante memorándum remitido por la secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, recibido por este el diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019). Se comprueba que se trata de una notificación válida de la sentencia recurrida y que admite el inicio del conteo del plazo establecido legalmente en el referido artículo 54.1. Consecuentemente, al haberse incoado el presente recurso mediante instancia depositada el dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019), se comprueba que fue interpuesto en plazo hábil y en tiempo oportuno, el veintidós (22) del mismo mes y año.

9.4. El recurso de revisión constitucional, según lo establecen los artículos 277 de la Constitución y el 53 de la referida Ley núm. 137-11, procede contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) y contra las cuales no exista ningún otro recurso disponible. En el presente caso, al haberse dictado la sentencia objeto del recurso de revisión con posterioridad a la indicada fecha y tratarse de una decisión dictada en última instancia, procede continuar con el análisis de los demás presupuestos de admisibilidad.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

9.5. El artículo 53 de la referida Ley núm. 137-11 establece que el recurso de revisión procede «1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental (...)».

9.6. En este caso, la parte recurrente fundamenta su recurso esencialmente en la violación a sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, alegando que los artículos por los que fue declarado culpable y condenado el recurrente habían sido derogados; que la sentencia recurrida carece de motivación y que se violan precedentes constitucionales. En ese sentido, este tribunal comprueba que se trata de un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que se enmarca en el numeral 3 del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, argumentos a partir de los cuales el presente recurso es admisible.

9.7. Cuando el recurso se fundamenta en la violación de un derecho fundamental, el legislador condiciona su admisibilidad a que se satisfagan los requisitos adicionales siguientes:

- a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma;*
- b) que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada;*
- c) que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

9.8. El primero de los requisitos se satisface, debido a que las vulneraciones a derechos fundamentales alegadas por la parte recurrente, conforme se ha podido comprobar al examinar los documentos sometidos a nuestra consideración, denuncian violaciones que han sido imputadas directamente a la decisión objeto del presente recurso.

9.9. En cuanto al segundo requisito, nos encontramos apoderados de un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional de una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en materia penal. En el presente caso, como no existe ningún otro recurso posible en contra de la referida decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que pueda ser interpuesto por las partes, también procede indicar que se satisface el referido requisito.

9.10. En el presente caso, también se satisface el tercer requisito, ya que se observa que los argumentos del recurrente se dirigen en contra de la interpretación de la ley realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, señalando que la decisión no fue debidamente motivada y que como resultado fueron vulnerados sus derechos fundamentales.

9.11. La admisibilidad del recurso está condicionada, además, a que el caso tenga especial trascendencia o relevancia constitucional, en aplicación de lo que dispone el párrafo del artículo 53 de la indicada Ley núm. 137-11. En efecto, según este texto:

La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo solo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando este considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.

9.12. De igual forma, el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 refiere que la especial trascendencia o relevancia constitucional se apreciará «atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general protección de los derechos fundamentales».

9.13. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada, razón por la que este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configura en aquellos casos que, entre otros:

1) (...) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) propicien por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

9.14. Este tribunal constitucional estima que lo desarrollado en la Sentencia TC/0007/12, en ocasión de un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo es aplicable para el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, atendiendo al contenido del párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

9.15. Este tribunal constitucional, luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente, concluye que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible y debe conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá continuar con el desarrollo del criterio de este colegiado en torno a los derechos fundamentales en el proceso penal, específicamente relativos a la tutela judicial efectiva y el debido proceso frente a la existencia de un juicio conforme una legislación anterior y vigente al momento de producirse los hechos.

9.16. En consecuencia, al comprobarse la existencia de especial trascendencia o relevancia constitucional en el presente caso, así como el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad para el presente recurso, procede conocer su fondo.

10. En cuanto al fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

10.1. El señor Juan Portalatín Castillo Castillo plantea en su instancia recursiva que la Suprema Corte de Justicia incurrió en violación a precedentes del Tribunal Constitucional (i) la alegada extensión del proceso penal (ii), aplicación contradictoria de su propia jurisprudencia (iii) y además denuncia que fue juzgado y condenado conforme una legislación que ya no se encontraba vigente (iv). Tomando en consideración estos medios planteados, este tribunal constitucional se referirá a cada uno de ellos.

A. Alegada violación a los precedentes del Tribunal Constitucional

10.2. El recurrente establece en su escrito que la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia violó varios precedentes de este tribunal constitucional establecidos en múltiples ocasiones, con lo cual



República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

pretendía justificar la admisibilidad de su recurso, señalando que en el presente caso se cumplía con la causal de admisibilidad establecida en el artículo 53.2 de la Ley núm. 137-11.

10.3. En efecto, la violación a los precedentes del Tribunal Constitucional justifica la revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales, al punto que de comprobarse dicha violación, la consecuencia jurídica, lógica y necesaria es la revocación de la decisión objeto del recurso. Sin embargo, entre todos los argumentos esbozados en su instancia, el señor Juan Portalatín Castillo Castillo no establece de manera específica cuál fue el precedente de este tribunal constitucional vulnerado en su contra; tampoco resulta evidente para este colegiado en la aplicación del derecho realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

10.4. En los casos en los que el recurrente no ha indicado el o los precedentes de este tribunal cuyo criterio ha(n) sido vulnerado(s), y se limita a una mera exposición de que la sentencia recurrida es contraria al criterio fijado por este órgano, el medio de revisión así planteado carece de los elementos mínimos imprescindibles para determinar si la sentencia recurrida, en efecto, ha desconocido algún criterio establecido por esta sede (TC/0769/24). En consecuencia, al no establecer de manera específica cuáles fueron los precedentes constitucionales vulnerados por la sentencia recurrida, procede desestimar el presente medio de revisión y continuar examinando los planteamientos en cuanto al fondo del presente recurso.

B. Sobre la extensión del proceso penal

10.5. El señor Juan Portalatín Castillo Castillo continúa exponiendo en su recurso de revisión constitucional que la sentencia recurrida carece de motivación suficiente. Esto en función de que la Segunda Sala de la Suprema



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Corte de Justicia, a su parecer, no se refirió al planteamiento sobre la extinción de la acción por haber superado el plazo máximo de duración del proceso penal, sin que fuera emitida ninguna sentencia definitiva.

10.6. De cara al mismo planteamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció en la sentencia recurrida, conforme transcribimos en una parte anterior de la presente decisión, que la superación del plazo previsto en la norma procesal penal todavía se inscribía en un período razonable, dadas las particularidades del caso y capacidad de respuesta del sistema, sin que se evidenciara que se aletargara el proceso de manera indebida o irrazonable, analizando los distintos aplazamientos producidos en etapa de juicio que fueron provocados por la defensa de los imputados, rebeldías, incidentes y recursos.

10.7. Con relación al mismo planteamiento en contra de la misma sentencia bajo examen, pero con ocasión del recurso de revisión constitucional interpuesto por otro de los imputados en el proceso, conocido por este tribunal a través de la Sentencia TC/0157/21, quedó establecido:

10.29 De todo lo indicado este tribunal constitucional comparte el criterio expresado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su sentencia núm. 1704, que sostiene que la parte de la defensa tuvo incidencia significativa en el vencimiento y postergación del plazo máximo del proceso.

10.8. De todas formas, este tribunal realizará un recuento procesal del tiempo transcurrido en el conocimiento del presente caso, con la finalidad de establecer la razonabilidad o no de la extensión del proceso penal originalmente iniciado.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Fecha	Actuación procesal	Tiempo transcurrido entre actuaciones	Tiempo transcurrido total
Veinticuatro (24) de julio de dos mil nueve (2009)	Se conoció solicitud de imposición de medida de coerción ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Resolución 12MC-2009 (impedimento de salida del país y presentación periódica), por un espacio de 6 meses.	N/A	
Veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010)	Presentación de acusación en contra de los imputados.	Siete (7) meses, veinticuatro (24) días	
Veinte (20) de octubre de dos mil diez (2010)	Resolución 268-2010. Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio.	Seis (6) meses, veintitrés (23) días	



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Veintidós (22) de marzo de dos mil once (2011)	Fue emitido auto de asignación para el Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.	Cinco (5) meses, dos (2) días	
Veinte (20) de abril de dos mil doce (2012)	Primera audiencia del juicio. Suspendida para gestionar equipos de reproducción de videos.	Un (1) año, veinticuatro (24) días	
Tres (3) de mayo de dos mil doce (2012)	Audiencia recesada.	Doce (12) días	
Ocho (8) de mayo de dos mil doce (2012)	Se conocieron las declaraciones de los imputados y se cerraron los debates.	Cinco (5) días	
Catorce (14) de mayo de dos mil doce (2012)	Sentencia 71-2012, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que condenó a los imputados Marcos Lara Lorenzo, Juan	Seis (6) días	



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	Portalatín Castillo y Sauris Rodríguez Sánchez.		
Cinco (5) de junio de dos mil doce (2012)	Interposición de recurso de apelación del señor Marcos Lara Lorenzo.	Diecinueve (19) días	
Seis (6) de junio de dos mil doce (2012)	Interposición del recurso de apelación de los señores Sauris Rodríguez y Juan Portalatín Castillo.	Un (1) día	
Diez (10) de septiembre de dos mil doce (2012)	Se apodera la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de los recursos interpuestos.	Tres (3) meses, cuatro (4) días	
Doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012)	Audiencia de apelación pospuesta para dar oportunidad a nueva defensa del señor Juan Portalatín Castillo de estudiar el caso.	Tres (3) meses, dos (2) días	
Trece (13) de marzo de dos mil trece (2013)	Pospuesta para que el señor Juan Portalatín Castillo fuera asistido por su abogado y para que las partes tomen	Tres (3) meses, un (1) día	



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	conocimiento de la solicitud de extinción de la acción formulada por el imputado Sauris Rodríguez Sánchez.		
Cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013)	Se conoce el incidente previamente formulado.	Dos (2) meses, diecisiete (17) días	
Veintisiete (27) de junio de dos mil trece (2013)	Audiencia de lectura de sentencia sobre el incidente.	Veintitrés (23) días	
Dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013)	Pronunciamiento del fallo de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que anula la sentencia recurrida y envía el asunto a conocer un nuevo juicio.	Tres (3) meses, dieciocho (18) días	
Veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014)	Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación dicta Sentencia 218/2014 ordenando la celebración de un nuevo juicio, enviando el proceso	Un (1) año, trece (13) días	



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.		
Seis (6) de enero de dos mil quince (2015)	Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dicta auto de apoderamiento al Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.	Dos (2) meses, cinco (5) días	
Diez (10) de marzo de dos mil quince (2015)	Dictó auto de fijación de audiencia.	Dos (2) meses, cuatro (4) días	
Veintitrés (23) de marzo de dos mil quince (2015)	Primera audiencia del juicio. Aplazada para regular citaciones del caso.	Trece (13) días	
Dieciocho (18) de mayo de dos mil quince (2015)	Segunda audiencia de juicio. Aplazada para regularizar la cita de la defensa técnica del imputado Sauris Rodríguez Sánchez. Se declara	Un (1) mes, veintiún (21) días	



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	la rebeldía de Marcos Lara Lorenzo y Juan Portalatín Castillo Castillo.		
Seis (6) de julio de dos mil quince (2015)	Aplazada para notificar solicitud de extinción al Ministerio Público.	Un (1) mes, dieciséis (16) días	
Quince (15) de septiembre de dos mil quince (2015)	Resolución de incidente. Solicitud de extinción de la acción penal formulada por las partes fue diferida. Diferidas para ser conocidas y falladas para el día que esté fijado el juicio.	Dos (2) meses, nueve (9) días	
Veintiuno (21) de septiembre de dos mil quince (2015)	Partes plantearon solicitud de extinción de la acción penal por máxima duración del proceso. Rechazada por el tribunal.	Seis (6) días	
Doce (12) de octubre de dos mil quince (2015)	Aplazada dado que fueron notificados nuevos incidentes formulados por la	Veinte (20) días	



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	defensa técnica de los imputados.		
Diecisiete (17) de noviembre de dos mil quince (2015)	Aplazada para que el tribunal se pronuncie sobre recursos de oposición.	Un (1) mes, cinco (5) días	
Treinta (30) de diciembre de dos mil quince (2015)	Resolución 94-2015. Declara inadmisibles los recursos de oposición fuera de audiencia presentados por los imputados contra la decisión emitida en audiencia que rechazó las solicitudes de extinción.	Un (1) mes, trece (13) días	
Catorce (14) de enero de dos mil dieciséis (2016)	Aplazada para que el imputado Sauris Rodríguez Sánchez se encontrara asistido por su defensa técnica titular.	Doce (12) días	
Veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016)	Resolución 249-02-2016-TRES-00010, que declara inadmisibile la solicitud de extinción de la acción penal	Un (1) mes, diez (10) días	



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	presentada por el imputado Marcos Lara Lorenzo, dado que la misma ya había sido conocida y fallada.		
Veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016)	Aplazada para dar oportunidad a la defensa técnica del imputado Marcos Lara Lorenzo de que estuviera presente.	Un (1) día	
Veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciséis (2016)	Aplazada para que el tribunal fuera conformado por los jueces titulares.	Veinticinco (25) días	
Treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)	Inicia instrucción del juicio. MP presentó acusación. Aplazada para que las partes organicen sus pruebas para presentarlas en juicio.	Diez (10) días	
Dieciocho (18) de abril de dos mil dieciséis (2016)	Continuación de presentación de las pruebas. Posteriormente Recesada.	Catorce (14) días	



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016)	Continuación de presentación de pruebas y testimonios. Recesado para conocer los demás procesos enrolados.	Nueve (9) días	
Cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016)	Recesada para que el representante del Ministerio Público estuviera presente.	Siete (7) días	
Nueve (9) de mayo de dos mil dieciséis (2016)	Se escuchó testimonio a cargo del Ministerio Público y se inició la presentación de las pruebas a descargo. Posteriormente recesada para continuar con el conocimiento de los procesos enrolados.	Cinco (5) días	
Veinte (20) de mayo de dos mil dieciséis (2016)	Continuación de presentación de pruebas a descargo. Se escucharon declaraciones de los imputados Marcos Lara Lorenzo y Juan	Once (11) días	



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	Portalatín Castillo Castillo.		
Treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016)	Presentación de conclusiones del Ministerio Público. Recesada.	Once (11) días	
Siete (7) de junio de dos mil dieciséis (2016)	Conclusiones de la defensa técnica de los co-imputados.	Cuatro (4) días	
Diecisiete (17) de junio de dos mil dieciséis (2016)	Continuación de la presentación de las conclusiones de la defensa técnica de los co-imputados. Fecha de la sentencia de primera instancia.	Diez (10) días	
Ocho (8) de julio de dos mil dieciséis (2016)	Se había fijado lectura íntegra de la decisión. Prorrogada.	Diez (10) días	
Veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis (2016)	Prorrogada	Veinte (20) días	
Diecinueve (19) de agosto de dos mil dieciséis (2016)	Se dio lectura a la decisión de fondo y se ordenó la notificación de la misma a las partes del proceso.	Diecinueve (19) días	



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Dos (2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)	Emisión del auto de asignación de sala para conocer los recursos de apelación interpuestos por los imputados.	Dos (2) meses, doce (12) días	
Veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017)	Audiencia donde las partes concluyeron al fondo.	Cuatro (4) meses, veintiuno (21) días	
Veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017)	Audiencia de lectura de la sentencia y fecha de la decisión de apelación.	Dos (2) meses, veintitrés (23) días	
Dieciséis (16) de julio de dos mil diecisiete (2017)	Interposición del recurso de casación del imputado Marcos Lara Lorenzo.	Veintiséis (26) días	
Dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017)	Interposición del recurso de casación del imputado Juan Portalatín Castillo Castillo.	Un (1) día	
Diecinueve (19) de julio de dos mil diecisiete (2017)	Interposición del recurso de casación del imputado Sauris Rodríguez Sánchez.	Un (1) día	
Tres (3) de octubre de dos mil dieciocho (2018)	Resolución 3711-2017, dictada por la segunda Sala de la	Dos (2) meses, doce (12) días	



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

mil diecisiete (2017)	Suprema Corte de Justicia, que declaró la admisibilidad de los recursos de casación.		
Once (11) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)	Audiencia donde las partes presentaron conclusiones.	Dos (2) meses, ocho (8) días	
Treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018)	Fecha de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.	Diez (10) meses, veinte (20) días	Nueve (9) años, tres (3) meses, siete (7) días

10.9. Todo lo anterior consta en las decisiones aportadas por el recurrente, anexadas a su recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Particularmente, la decisión dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia realizó un examen pormenorizado y detallado de las circunstancias y aplazamientos que fueron generados en cada una de las instancias judiciales que intervinieron en el presente proceso, tomando en consideración las particularidades del caso, la capacidad de respuesta de los tribunales apoderados del fondo, así como el ejercicio de recursos que fueron calificados como temerarios.

10.10. No constan en los anexos propuestos por el recurrente otras actuaciones que sí fueron analizadas con anterioridad por este tribunal constitucional, según estableció en la Sentencia TC/0157/21, como otros aplazamientos promovidos por los imputados y la interposición de un recurso de casación indebidamente perseguido en contra de una decisión cuya impugnación por esa vía no estaba



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

dentro de las causales permitidas de conformidad con el artículo 425 del Código Procesal Penal (TC/0502/15).

10.11. En virtud de todo lo analizado anteriormente, en el desarrollo del proceso penal iniciado en el presente caso, si bien se observa una extensión considerable del mismo, no se observa la existencia de pausas ni retrasos injustificados en su conocimiento que sean imputables al Ministerio Público ni al Poder Judicial.

10.12. También debemos referir que este colegiado ha examinado la extensión de procesos penales, descontando del plazo de la extinción los aplazamientos atribuibles al imputado, su defensa o causas razonables, indicando que la misma jurisprudencia penal ha aclarado que la existencia de incidentes y pedimentos planteados por el imputado que dilataran el proceso, impide la declaración de la extinción del proceso penal, debido a que las mismas no son extensivas para la contabilización del plazo razonable (TC/0303/20; TC/0396/22). También ha establecido que debe ser tomada en consideración la complejidad del caso, la razonabilidad del tiempo transcurrido entre cada actuación, por lo que no es suficiente realizar un cálculo aritmético del tiempo intervenido entre las decisiones jurisdiccionales intervenidas en el proceso penal (TC/0270/24).

10.13. Consecuentemente, este colegiado confirma lo establecido a través de la Sentencia TC/0157/21, indicando que en el presente caso no se observa que la duración del proceso penal haya transgredido los derechos del recurrente, atendida la complejidad del caso, la actividad procesal de las partes, su comportamiento en el desarrollo del proceso y la conducta de los tribunales judiciales. En consecuencia, procede rechazar el medio planteado y continuar con la evaluación de los demás medios planteados.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

C. Sobre la supuesta aplicación contradictoria de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia

10.14. Para fundamentar el medio bajo análisis, el señor Juan Portalatín Castillo Castillo alega que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia aplicó de manera contradictoria su propia jurisprudencia, bajo el argumento de que no se valoraron de manera individual cada uno de los medios esbozados por los imputados, citando una sentencia de la propia Suprema Corte de Justicia que criticaba la realización de una «valoración conjunta de los medios invocados por cada uno de los recurrentes, sin individualizar los argumentos particulares externados por estos (...)» donde dicho tribunal calificó esta actuación como «(...) la manifestación de una sentencia genérica que impide valorar eficazmente si la ley ha sido bien aplicada».

10.15. Lo que se observa en el presente caso es que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia realizó un examen conjunto de algunos medios de casación que fueron planteados de manera similar por todos los imputados recurrentes, los cuales respondió de manera conjunta dada su estrecha vinculación. Si bien esta práctica, por sí sola, no constituye la violación de ningún derecho constitucional en contra del recurrente, resulta razonable someter el argumento y el análisis de la sentencia al rigor del test de la debida motivación.

10.16. Este tribunal ha reiterado en múltiples ocasiones el criterio esbozado en la Sentencia TC/0009/13, donde se establece de manera categórica la importancia de que los tribunales correlacionen los principios, reglas y normas que aplicarán en cada caso con las premisas lógicas del fallo. A su vez, esto evitará la vulneración a la garantía del debido proceso por falta de motivación. A partir de dicha decisión, se adoptó un test para determinar si la motivación de las decisiones judiciales seguía un rigor que respondía a las necesidades de las



República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

partes, a los principios constitucionales que así lo exigen y a la labor de los tribunales frente a la sociedad. Dicho examen comprende los elementos que serán examinados a continuación, aplicados a la sentencia objeto del presente recurso.

a. Desarrollo sistemático de los medios en que se fundamentan las decisiones. Se observa el cumplimiento de este requisito en la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Consta la transcripción de las pretensiones de las partes recurrentes y la valoración de cada una de estas en el desarrollo de sus motivaciones, con lo cual resulta una evidente correlación entre los planteamientos de los imputados y lo resuelto.

b. Exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. La decisión bajo examen también cumple con este requisito, en el sentido de que presenta los fundamentos justificativos para referirse al fondo de las pretensiones de cada uno de los recurrentes en casación. Particularmente, se observa que todos los recurrentes en casación hicieron planteamientos comunes, los cuales fueron reunidos y respondidos de manera conjunta, sin dejar de referirse de manera particular a cada uno de los planteamientos esbozados por las partes.

c. Manifestación de las consideraciones pertinentes que permiten determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada. La Sentencia núm. 1704 cumple con este requisito, en tanto se observa un análisis detenido y razonado de cada uno de los argumentos expuestos por las partes recurrentes y se manifiestan las respuestas y fundamentos jurídicos de la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, las cuales son, a juicio de este colegiado, jurídicamente correctas.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de disposiciones legales supuestamente violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción. Se comprueba, con el análisis de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que se realiza una identificación e interpretación correcta y precisa de las disposiciones legales que fundamentaron la decisión, sin incurrir en la transcripción genérica de disposiciones y principios. También se observa en la sentencia recurrida un análisis pormenorizado de toda la extensión del proceso penal que dio origen al caso, con lo cual también se confirma el cumplimiento de este requisito.

e. Fundamentación que cumple la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional. Finalmente, el cumplimiento de este requisito queda evidenciado con el cumplimiento de todos los requisitos anteriores que componen el examen de la motivación de las decisiones jurisdiccionales. Al exponer los argumentos de las partes, responderlos de manera sistemática, clara y precisa y con el fundamento jurídico adecuado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia cumplió con su función de legitimación frente a la sociedad.

10.17. A la luz de lo establecido anteriormente, con el cumplimiento de todos los requisitos del test de la debida motivación, es válido concluir que no lleva la razón el recurrente al establecer que la sentencia bajo examen vulneró sus derechos fundamentales al no conocer de manera particular o individual los planteamientos de las partes. Se evidencia un conocimiento razonado y pormenorizado del recurso de casación, así como una adecuada respuesta de cada uno de los medios planteados por las partes. En consecuencia, procede rechazar el medio bajo análisis y continuar con la evaluación del fondo del presente recurso de revisión constitucional.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

D. En cuanto a la vigencia de los textos legales que sustentan la condena

10.18. El recurrente alega que fue acusado, juzgado y condenado por una legislación inexistente. En concreto, refiere que los artículos 169 al 172 del Código Penal fueron derogados por la Ley núm. 712, del veintisiete (27) de junio de mil novecientos veintisiete (1927) y esta, a su vez, también fue derogada por la Ley núm. 3379, del ocho (8) de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos (1952). Denuncia, en consecuencia, que se le condenó con base en una legislación inexistente, que hizo el reclamo en apelación y el mismo fue desestimado por entender que la legislación vigente era la referida ley núm. 712. También refiere que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia no se refirió sobre este particular, ratificando la mención que hizo al respecto la corte de apelación e ignorando la legislación vigente, contenida en la Ley núm. 3379, del ocho (8) de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos (1952).

10.19. Al respecto, conviene transcribir lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia refirió en la sentencia bajo examen:

Considerando, que con respecto a este alegato, la Corte a-qua tuvo a bien referirse de la siguiente manera: “(página 28, numeral 10) ... el tribunal de primer grado dio por establecido que los imputados Marcos Lara Lorenzo, Juan Portalatín Castillo Castillo y Sauris Rodríguez Sánchez, en sus calidades de Director General del Programa de Reducción de Apagones (P.R.A.), Director Administrativo y Financiero del Programa de Reducción de Apagones (P.R.A.), respectivamente cometieron desfalco, en razón de que siendo funcionarios destinaron dinero o fondos públicos a uso o fin distinto para el cual le fue entregado o puesto bajo su guarda, en violación al artículo 171 del Código Penal (modificado por el artículo 3 de la Ley 712 del 27 de junio de 1927, G.O. 3872); en consecuencia, la Corte a-qua concibió que la



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

sentencia atacada resultaba justa y correcta, por lo que entendió improcedente acoger la revocación pretendida; como está definido en el código se considera desfalco a la falta, negligencia o negativa de los funcionarios o empleados en depositar o remitir fondos cuando deba hacerlo, de manera que toda persona encargada de un servicio de interés público o un agente investido de una porción de la autoridad pública es un funcionario público; por consiguiente, esta alzada considera pertinente rechazar el vicio aludido.

10.20. Consta en el expediente que el señor Juan Portalatín Castillo Castillo fue declarado culpable de desfalco, de conformidad con las disposiciones y sanciones establecidas en el artículo 171 del Código Penal. Si bien es cierto que las previsiones contenidas en dicho artículo fueron modificadas y sustituidas a través de la Ley núm. 712, que regula el manejo de los fondos públicos, específicamente las contenidas en su artículo 3, las mismas fueron posteriormente restablecidas como originalmente constaban en el Código Penal a través de la Ley núm. 3379, texto que se mantiene con vigencia incluso en la actualidad. Conviene transcribir lo establecido en el referido texto legal:

Art. 1. Se restablecen los artículos 169, 170, 171 y 172 del Código Penal, que fueron sustituidos por la Ley No. 712, del 27 de junio de 1927, publicada en la Gaceta Oficial No. 3872, y de manera que rijan del siguiente modo: (...)

Art. 171. La apropiación por parte de cualquier funcionario o empleado, de dinero, propiedad, suministros o valor, para destinarlo a un uso y fin distintos de aquellos para los cuales le fue entregado o puesto bajo su guarda; o la falta, negligencia o negativa a rendir cuenta exacta del dinero recibido, sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terrenos, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales,



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

suministros, u otras cosas de valor, se tomará como evidencia prima facie de desfalco. (...)

10.21. Consecuentemente, al comprobarse que en el presente caso el recurrente ha sido juzgado y condenado conforme a la legislación vigente y aplicable al caso, procede rechazar el medio de revisión planteado y, con ello, el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.

11. Sobre la demanda en suspensión de ejecución de sentencia

11.1. Si bien entre los argumentos esbozados por el señor Juan Portalatín Castillo Castillo no refiere de manera expresa la justificación para la adopción de una medida cautelar como la suspensión, en sus conclusiones solicita que se ordene dicha medida con relación a la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Al respecto, es pertinente señalar que dicha solicitud de suspensión carece de objeto, ya que con las consideraciones esbozadas precedentemente a través de esta decisión, se ha determinado rechazar el recurso de revisión y confirmar la sentencia de referencia. Consecuentemente, procede declarar la inadmisibilidad por falta de objeto de dicha solicitud, de conformidad con la línea jurisprudencial adoptada al respecto por este tribunal constitucional, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva (TC/0120/13; TC/0006/14; TC/0073/15; TC/0538/15; TC/0511/24).

Esta decisión, aprobada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran los magistrados Fidias Federico Aristy Payano y Sonia Díaz Inoa, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley.

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Juan Portalatín Castillo Castillo en contra de la Sentencia núm. 1704, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión constitucional y, en consecuencia, **CONFIRMAR** la Sentencia número 1704, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), con base en los argumentos que figuran en el cuerpo de la presente decisión.

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, el señor Juan Portalatín Castillo Castillo, así como a la Procuraduría General de la República.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la referida Ley núm. 137-11.

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Aprobada: Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; Miguel Valera Montero, primer sustituto; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; José Alejandro Ayuso, juez; Alba Luisa Beard Marcos, jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez; Army Ferreira, jueza; Domingo Gil, juez; Amaury A.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reyes Torres; juez; María del Carmen Santana de Cabrera, jueza; José Alejandro Vargas Guerrero; juez.

La presente sentencia fue aprobada por los señores jueces del Tribunal Constitucional, en la sesión del pleno celebrada en fecha quince (15) del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025); firmada y publicada por mí, secretaria del Tribunal Constitucional, que certifico, en el día, mes y año anteriormente expresados.

Grace A. Ventura Rondón
Secretaria